

Misceláneas

COLABORACIÓN - TRADUCCIÓN

**EL OCASO DE NORTEAMÉRICA:
SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS****Noam Chomsky***Profesor Emérito de Lingüística y Filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge.**Publicado el miércoles, 24 de agosto de 2011.*

En su número de verano de 2011, la revista de la Academia Estadounidense de Ciencias Políticas afirma que ya casi es un lugar común decir que los Estados Unidos, que “hace apenas unos años eran ensalzados por imperar sobre el mundo como un coloso dotado de un poder sin igual y un atractivo sin precedentes, se hallan ahora en declive, contemplando irremediamente la certeza de su ocaso final.” Desde luego, este tipo de afirmaciones se han vuelto muy comunes y muchos las tienen por ciertas, no sin algo de razón. Pero el análisis de la política exterior de los EEUU y su influencia internacional, junto con la solidez de su economía y de sus instituciones políticas en el interior, exigen que hagamos algunas matizaciones. Para empezar, el declive se ha producido de una forma continuada desde el punto álgido de su poder, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Vista desde esta perspectiva, la sorprendente retórica triunfal que ocupó buena parte de los años noventa del siglo XX no podía ser sino una forma de autoengaño. Por otro lado, la conclusión que a menudo se saca de estas premisas –esto es, que el dominio planetario va a pasar a continuación a China e India– es más que improbable, porque éstos no dejan de ser países pobres que sufren una larga lista de problemas internos. Aunque no hay duda alguna de que el mundo se está haciendo cada vez más diverso, y aún teniendo en cuenta el declive de los EEUU, lo cierto es que no se adivina rival alguno a su poder hegemónico y global en el futuro cercano.

A modo de breve repaso a los hitos más relevantes, podemos decir que durante la Segunda Guerra Mundial los encargados de planear el futuro de los Estados Unidos se dieron cuenta de que iban a emerger del conflicto en una posición de predominio indiscutido. A partir de los registros documentales es fácil ver que, en palabras del historiador de la diplomacia internacional, Geoffrey Warner, “el Presidente Roosevelt

se había fijado como objetivo la hegemonía de los Estados Unidos en el escenario posbélico.” Se hicieron planes para el control efectivo de lo que se vino a denominar la Gran Zona, una región del globo que incluía el hemisferio occidental, el Lejano Oriente, el antiguo imperio británico (incluyendo las vitales reservas de petróleo de Oriente Medio) y una porción tan grande de Eurasia como fuese posible, o, en su defecto, las principales regiones industriales de Europa Occidental y los países del sur del continente, ya que se consideraba que estos últimos eran imprescindibles para asegurar el control de los recursos energéticos de Oriente Medio. En el conjunto de estos extensos dominios, los Estados Unidos mantendrían una “autoridad incuestionable”, basada en una “supremacía económica y militar”, desde la que “limitar cualquier ejercicio independiente de la soberanía” de los otros estados incluidos en la Zona, que pudiese interferir con sus designios planetarios. Aunque el ámbito de aplicación de esta política ha disminuido, la doctrina como tal continúa.

Los planes hechos en tiempos de guerra, puestos en práctica con esmero muy poco después, no tenían nada de irrealizables. Llegados a ese punto, los Estados Unidos ya llevaban mucho tiempo siendo el país más rico del planeta, con diferencia. Por un lado, la guerra había puesto fin a la Gran Depresión y su capacidad industrial se había multiplicado por cuatro, mientras que la de sus competidores había prácticamente desaparecido. Hacia el final del conflicto, los Estados Unidos acumulaban cerca de la mitad de la riqueza mundial y disfrutaban de una seguridad sin parangón. En este marco, cada región de la Gran Zona cumplía una “función” asignada dentro del sistema global. La Guerra Fría que siguió al final de la mundial no era más que los esfuerzos de las dos superpotencias de instaurar su propio orden en sus dominios: Europa del Este para la URSS y la mayoría del resto del planeta para los Estados Unidos.

Sin embargo ya en 1949 la Gran Zona se estaba viendo minada seriamente por la “pérdida de China”, como se la suele llamar. Esta elección de palabras es interesante en sí misma: sólo se puede perder lo que se posee en un principio. Poco después, el Sudeste Asiático empezó a escapar a este control, lo que llevó directamente a las espantosas guerras que libró Washington en Indochina y a las ingentes masacres que se produjeron en Indonesia en 1965, conforme se restauraba allí el dominio de los Estados Unidos. Mientras tanto, los derrocamientos y la violencia indiscriminada siguieron ininterrumpidas en otras partes, como parte del esfuerzo de mantener lo que se denominó como “estabilidad” y que no era otra cosa que la sumisión a las exigencias de la superpotencia.

Hoy en día, la OTAN se ha convertido en una fuerza de intervención global, bajo el mandato de los Estados Unidos, con la misión declarada de controlar el sistema internacional de suministro de energía, a través de rutas marinas o terrestres, junto con cualquier otra tarea que le encomiende el poder hegemónico.

Sin embargo, el declive era inevitable, ya que el mundo industrializado se reconstruía y la descolonización proseguía su curso, aunque con exasperante lentitud. Hacia 1970 la parte correspondiente a los Estados Unidos de la riqueza mundial había descendido hasta un 25%, que, aunque sigue siendo enorme, representa un descenso muy marcado. A su vez, el mundo industrializado se hacía tripolar, con sus centros principales en torno a los propios EEUU y a Europa junto con Asia, dominada entonces por Japón, que ya para entonces se había convertido en la región más dinámica.

Veinte años después se produjo el colapso de la Unión Soviética, frente al que la reacción de Washington resultó muy explicativa de la realidad de la Guerra Fría. La administración de Bush I, que era el presidente en ese momento, declaró de manera inmediata que las políticas que se habían venido aplicando iban a seguir adelante sin cambios en lo fundamental, pero bajo pretextos diferentes. El inmenso entramado militar se mantenía, ya no para defenderse de los rusos sino para hacer frente a la “sofisticada tecnología” de los países del Tercer Mundo. De un modo parecido, según se explicaba, era necesario mantener “los cimientos industriales de la defensa”, un eufemismo

empleado para referirse a las empresas de vanguardia, que dependen en gran medida de las subvenciones y la orientación del gobierno. Había que mantener una fuerza de intervención apuntando a Oriente Medio, de cuyas serias dificultades “no se puede culpar al Kremlin”, contrariamente a lo dicho durante más de medio siglo de mentiras. Sin grandes aspavientos se pasó a afirmar que el principal problema había sido siempre el “nacionalismo radical”, es decir, cualquier intento de un país de elegir su camino independientemente, en violación de los principios fundamentales de la Gran Zona. El gobierno de Clinton declaró que los Estados Unidos tenían el derecho de recurrir a la fuerza de manera unilateral para garantizar su “acceso sin restricciones a los mercados principales, fuentes energéticas y recursos estratégicos”. También se dijo que sus fuerzas armadas debían permanecer desplegadas en Europa y Asia “para influir en las opiniones del público sobre nosotros”, no precisamente mediante la persuasión amable, y en “los sucesos que afectan nuestro estilo de vida y nuestra seguridad”. A pesar de lo que la propaganda le hubiese podido llevar a pensar a uno, la OTAN no fue reducida o eliminada, sino que se extendió hacia el este, algo que suponía una clara violación de las promesas hechas a Mijail Gorbachov cuando éste accedió a que la Alemania reunificada se integrase en la OTAN.

Hoy en día, la OTAN se ha convertido en una fuerza de intervención global, bajo el mandato de los Estados Unidos, con la misión declarada de controlar el sistema internacional de suministro de energía, a través de rutas marinas o terrestres, junto con cualquier otra tarea que le encomiende el poder hegemónico.

Es cierto que se vivió un período de euforia tras el colapso de la superpotencia enemiga, en medio del cual se escucharon relatos exagerados acerca del “fin de la historia” y alabanzas extasiadas de la política exterior de Clinton. Intelectuales de renombre anunciaron el nacimiento de una “fase noble”, rodeada de un “halo de santidad”, como si por primera vez en la historia una nación actuase guiada por el “altruismo” y la dedicación a sus “principios y valores” y ya no se interpusiese nada en el camino hacia “un mundo nuevo idealista, determinado a acabar con todo aquello que no respira humanidad”. Por fin se podría hacer avanzar sin cortapisas la incipiente norma internacional de la intervención humanitaria.

Pero no todos estaban tan entusiasmados. Las víctimas habituales, los países del Sur, condenaron con dureza “el así llamado derecho de intervención humanitaria”, en el que no reconocían otra cosa que el mismo “derecho” anterior de dominación

imperialista. De la misma manera, en el interior de los Estados Unidos, aparecieron voces más escépticas entre las élites políticas, que no dejaron de darse cuenta de que para una buena parte del mundo, el país se estaba “convirtiendo en una superpotencia malvada”, a la que se consideraba “el principal riesgo externo a la cohesión de sus sociedades” y que “el estado criminal más grande en este momento son los propios Estados Unidos”. Poco después de que Bush junior tomara el relevo, la opinión internacional había llegado a ser tan hostil que ya no se podía seguir ignorando por más tiempo. Especialmente en el mundo árabe los porcentajes de aprobación del Presidente se hundieron en picado. Sin embargo, Obama ha conseguido la sorprendente hazaña de caer aún más bajo, llegando a un 5% en Egipto, no siendo mucho más en el resto de la zona.

Mientras tanto, el declive seguía imparabile. En estos últimos diez años, se ha perdido América Latina, aunque el riesgo de que esto ocurriera era evidente desde algunas décadas atrás. Al mismo tiempo que el gobierno de Nixon planeaba la destrucción de la democracia en Chile y la instauración de la dictadura de Pinochet, con el apoyo norteamericano, el Consejo de Seguridad Nacional avisaba de que si los Estados Unidos no eran capaces de controlar América Latina, entonces no podían tener esperanzas de “conseguir un dominio efectivo sobre las demás partes del mundo”.

Pero los avances hacia la independencia del Medio Oriente representaban una amenaza mucho más seria. En los planes hechos al final de la Segunda Guerra Mundial, se reconocía que el control de las incomparables reservas energéticas de esta zona permitiría “en buena medida el dominio del planeta”, para decirlo con las palabras del influyente asesor del presidente Roosevelt, A. A. Berle. Inversamente, la pérdida del control sobre esta zona amenazaba el proyecto de dominación global que había sido claramente expresado durante la Segunda Guerra Mundial y se había mantenido sin cambios importantes, a pesar de las transformaciones que se habían producido en el orden planetario desde ese entonces.

Una amenaza adicional a la hegemonía de los Estados Unidos ha sido la posibilidad de que se diese algún avance significativo hacia una democracia. El redactor jefe del New York Times, Bill Keller, escribió en una ocasión unas emocionadas líneas acerca del “anhelo de Washington de recibir con los brazos abiertos a los demócratas en ciernes de todo el Norte de África y el Medio Oriente”. Sin embargo, estudios de opinión recientes en los países árabes demuestran con claridad que una democracia operativa, en la que la opinión pública tuviese una verdadera

influencia en las políticas de los estados sería desastrosa para Washington. Por eso no es de extrañar que los primeros pasos que ha dado la política exterior egipcia desde el derrocamiento de Mubarak hayan recibido una fuerte oposición por parte de los Estados Unidos y su satélite, Israel.

Bajo la presidencia de Obama, si bien las políticas a más largo plazo de los Estados Unidos han seguido siendo las mismas, con algunos ajustes tácticos, también se han producido algunos cambios significativos. Tal y como ha señalado el analista militar Yochi Dreazen, mientras que la política de Bush era capturar (y torturar) a cualquier sospechoso, la de Obama es simplemente asesinarlos, por lo que se ha visto un vertiginoso aumento del uso del armamento selectivo (aviones no tripulados) y de las Fuerzas Especiales, muchas de las cuales son equipos de asesinos. En este momento están operativas en 120 países y su número de efectivos es equivalente a todo el ejército de Canadá junto. De hecho, constituyen una auténtica guardia privada del Presidente, algo que analiza en detalle el periodista de investigación Nick Turse en la página web Tomdispatch. El equipo que Obama envió a matar a Osama bin Laden ya había llevado a cabo, aproximadamente, una docena de operaciones similares en Pakistán.

Como demuestra este hecho, y otros muchos similares, aunque la hegemonía de los Estados Unidos haya declinado, su ambición no lo ha hecho.

Otro lugar común, por lo menos para aquellos que no se niegan a ver la realidad, es que el declive norteamericano es en buena medida culpa de los propios estadounidenses. La opereta cómica que se ha representado en Washington a lo largo de este verano, que asqueó al país (la mayor parte de la población piensa que se debería disolver el Congreso) y anonadó al mundo, encuentra pocos antecedentes en los anales de las democracias parlamentarias¹. El espectáculo está llegando hasta el punto de asustar a los propios promotores de la bufonada. Ahora, el poder económico teme que los extremistas que ha colocado en el Congreso decidan desmontar todo el sistema sobre el que se fundan sus privilegios y su riqueza, el estado protector y fuerte que responde a sus necesidades del momento. En una ocasión el eminente filósofo norteamericano John Dewey describió la política como “una sombra que proyectan sobre la sociedad las

¹ Nota del Traductor: Se refiere a las negociaciones entre demócratas y republicanos durante el verano de 2011 para aumentar el nivel de endeudamiento permitido al gobierno y que estuvieron a punto de forzar a este país a incumplir con las fechas de vencimiento de la deuda por la intransigencia del ala radical republicana.

altas esferas de la economía” y advirtió que “por mucho que ésta se haga menos visible no se altera su esencia”. Desde la década de los setenta del siglo XX, esta sombra se ha vuelto una nube oscura que envuelve a la sociedad y al sistema político. El poder económico, a estas alturas representado principalmente por el capital financiero, ha conseguido llegar hasta el extremo de que las dos organizaciones políticas mayoritarias, que apenas se parecen ya a partidos en el sentido tradicional del término, están mucho más a la derecha que la mayoría de la población en casi todos los asuntos políticos relevantes.

Para la opinión pública, la principal preocupación interna es, con toda la razón, la grave crisis de desempleo. Bajo las actuales circunstancias, la única manera de superar esta situación crítica es mediante un generoso paquete de ayudas del gobierno, mucho más amplio que el recientemente aprobado, para estimular la economía. Este último apenas fue equivalente al descenso del gasto estatal y de las autoridades locales, aunque es probable que tan sólo con esta limitada iniciativa se haya conseguido mantener millones de puestos de trabajo. En cambio para el mundo de las finanzas la principal preocupación es el déficit y por lo tanto, éste es el único tema sobre la mesa. Una gran mayoría de la población está a favor de disminuirlo mediante impuestos a los más ricos (72% a favor frente a un 21% en contra). Del mismo modo un gran porcentaje se opone a los recortes en sanidad (69% en el caso de Medicaid, la limitada cobertura pública para personas de rentas bajas, y un 79% en el de Medicare, el servicio sanitario para ancianos y discapacitados). Por lo tanto, el resultado más probable es precisamente el opuesto.

Al hacer públicos los resultados de un estudio acerca de cómo lo público podría eliminar el déficit, su director, Steven Kull, ha escrito que: “Es obvio que tanto el gobierno como el Congreso, con mayoría republicana, no representan los valores y prioridades de la población en lo que respecta al presupuesto [...] La principal diferencia es que la opinión pública está a favor de que se recorte el presupuesto de defensa en profundidad, mientras que los dirigentes políticos proponen un pequeño incremento [...] También se está de acuerdo con un aumento [...] en las partidas destinadas a formación laboral, educación y control de la contaminación, a diferencia, de nuevo, del gobierno y el Congreso.”

Se estima que el coste de las guerras de Bush y Obama en Irak y Afganistán puede alcanzar hasta los 4,4 billones de dólares, lo que constituye una gran victoria para Osama bin Laden, cuyo objetivo declarado era provocar la bancarrota de los Estados

Unidos llevándolos hacia una trampa. El presupuesto militar de 2011, que es casi equivalente al del resto del mundo junto, es mayor, en términos reales, que en ninguna otra época desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y está previsto que aumente aún más.

En buena medida, la crisis del déficit se ha tramado como un arma con la que destruir algunos de los vilipendiados programas sociales, de los que depende una buena parte de la población. El redactor económico del Financial Times de Londres, Martin Wolf, escribe que “no se trata de que haya que resolver la situación fiscal de los Estados Unidos de forma urgente... Aún son capaces de obtener dinero prestado con buenas condiciones, con un interés cercano al 3% en sus bonos a 10 años, tal y como predijeron los pocos analistas que no se han dejado llevar por la histeria. El problema fiscal se plantea a largo plazo, no de una forma inmediata”. Aún más significativamente añade que “lo que resulta más sorprendente de la situación fiscal de la reserva es que la previsión de ingresos se sitúa en apenas un 14,4% del PIB de 2011, mucho menor que el promedio en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es de casi el 18%. La parte correspondiente a los impuestos sobre los ingresos individuales no se prevé que sea más que un 6,3% del PIB en este mismo año. A los que no somos estadounidenses nos cuesta entender qué motivo hay de queja: en 1988, al final de la era Reagan, se ingresaba un 18,2% del PIB. Si se quiere que disminuya el déficit, no cabe duda de que los ingresos por impuestos han de aumentar sustancialmente”. Sorprendente, sin duda, pero en una democracia que desaparece rápidamente lo que cuentan son las exigencias de las instituciones financieras y de los más ricos.

A pesar de que la crisis del déficit se ha tramado para responder a las necesidades de una guerra de clases sin cuartel, la crisis de la deuda a largo plazo es grave, y lo ha sido desde que la irresponsabilidad fiscal de Ronald Reagan convirtió a los Estados Unidos en el mayor deudor del mundo, cuando antes era el principal acreedor, haciendo que se triplicase la deuda y generando amenazas para la economía que se agravaron de forma veloz con George W. Bush. Pero de momento es la crisis del desempleo la que representa el desafío más serio.

El “acuerdo” finalmente alcanzado sobre la crisis de la deuda –aunque debería llamarse con más precisión una rendición a la extrema derecha– es justo lo contrario de lo que desea la opinión pública y casi con toda seguridad, va a llevar a un crecimiento más lento y un perjuicio a largo plazo para todo el mundo, excepto los más ricos y las grandes multinaciona-

les, que siguen disfrutando de sus beneficios económicos, más altos que nunca. Hay poco analistas serios que no estén de acuerdo con el economista de Harvard, Lawrence Summers, cuando dice que “el actual problema de Norteamérica se debe mucho más a la falta de empleos y de crecimiento que a un déficit excesivo en el presupuesto”. Además, es muy probable que el acuerdo alcanzado en agosto en Washington, si bien es preferible a una más que improbable moratoria en los pagos de la deuda, acabe causando un daño aún mayor a una economía en retroceso.

Se estima que el coste de las guerras de Bush y Obama en Irak y Afganistán puede alcanzar hasta los 4,4 billones de dólares, lo que constituye una gran victoria para Osama bin Laden, cuyo objetivo declarado era provocar la bancarrota de los Estados Unidos llevándolos hasta una trampa.

Algo de lo que no se oye hablar es el hecho de que el déficit desaparecería, si el poco práctico sistema de salud privado que hay en los Estados Unidos fuera reemplazado por otro parecido a los de la mayoría de las sociedades industriales, que cuestan la mitad por paciente y presentan unos resultados cuando menos comparables en términos de salud. Sin embargo, las instituciones financieras y la industria farmacéutica son demasiado poderosas para que ese tipo de opciones se lleguen a plantear siquiera, a pesar de que es una posibilidad que no tiene nada de utópica. Por motivos similares no se contemplan otras alternativas económicas razonables, tales como la adopción de un pequeño impuesto a las operaciones financieras.

Mientras tanto, cada cierto tiempo se le prodigan a Wall Street nuevos presentes. El Comité de Presupuestos del Congreso redujo el dinero disponible para la Comisión del Mercado de Valores, la principal herramienta de control del fraude financiero. Tampoco parece que la Agencia de Protección al Consumidor vaya a sobrevivir mucho más sin grandes cambios. Pero el Congreso aún tiene otras armas a su disposición en su lucha contra las generaciones futuras. Según informa el New York Times, debido a la oposición republicana a las medidas de protección medioambiental, “una importante empresa eléctrica norteamericana descartará el mayor esfuerzo hecho en el país para capturar el dióxido de carbono de una estación termoelectrónica concreta que funciona con carbón, con lo que se

asestaría un gran golpe a los intentos de controlar las emisiones de efecto invernadero”.

Este tirar piedras contra el propio tejado no es un invento reciente, aunque sea cada vez más habitual. En realidad se puede encontrar ya en la década de los 70 del siglo XX, cuando la economía política del país experimentó grandes transformaciones, dando por cerrada lo que a menudo se llama ahora la “edad dorada” del capitalismo (de estado). Dos elementos fundamentales para que esto ocurriera fueron la creciente importancia de las finanzas y el desplazamiento de la producción a otros países. Ambos están relacionados con el descenso en la rentabilidad del capital industrial y el desmantelamiento de los acuerdos de Bretton-Woods, que habían instituido un sistema de controles al capital y de equilibrio monetario tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El triunfo ideológico de las “doctrinas de libre mercado”, tan exclusivas como siempre, contribuyó a todo este proceso, ya que se tradujo en desregulación, reglas de gobernanza corporativa que permiten abonar unos incentivos desproporcionados a los directivos de las grandes corporaciones en función de beneficios obtenidos a muy corto plazo, y otras decisiones políticas parecidas. La concentración de la riqueza resultante dio lugar a un mayor poder político, con lo que se inició un círculo vicioso cada vez más rápido que ha hecho que el diez por ciento de la población acumule una extraordinaria cantidad de riqueza, principalmente los directivos de las multinacionales, administradores de fondos de cobertura, y otros por el estilo, mientras que para la inmensa mayoría la capacidad adquisitiva real se ha estancado.

En los últimos treinta años, los “dueños de la humanidad”, tal y como los llamó Adam Smith, han abandonado cualquier interés sentimental por el bienestar de su propia sociedad, concentrándose en su lugar en las ganancias a corto plazo y los incentivos desmesurados. El resto del país se puede ir a hacer puñetas, mientras quede intacto un estado poderoso que sirva a sus intereses. Mientras tanto, el coste de las campañas electorales se ha disparado, lo que ha hecho que ambos partidos dependan aún más del bolsillo corporativo. Lo poco que queda de la democracia política se ha visto todavía más erosionado por el hecho de que ambas organizaciones han recurrido a la subasta de las posiciones de liderazgo en el congreso. El politólogo Thomas Ferguson señala que “un caso único entre los sistemas políticos del mundo desarrollado es el hecho de que los partidos de los Estados Unidos ahora ponen precio a los puestos clave del proceso legislativo”. Los congresistas que financian el partido reciben estos cargos, lo que les obliga, virtualmente, a convertirse en sirvientes del capital privado,

incluso más allá de lo que se considera normal. El resultado, tal y como señala Ferguson, es que los debates “se nutren en buena medida de la repetición interminable de unas cuantas frases de campaña, que han demostrado resultar atractivas de cara a los grupos nacionales de inversores y los grupos de interés, que son de quienes dependen los dirigentes por lo que recursos respecta.”

En los últimos treinta años, los “dueños de la humanidad”, tal y como los llamó Adam Smith, han abandonado cualquier interés sentimental por el bienestar de su propia sociedad, concentrándose en su lugar en las ganancias a corto plazo y los incentivos desmesurados. El resto del país se puede ir a hacer puñetas, mientras quede intacto un estado poderoso que sirva a sus intereses.

La economía de la etapa posterior a la “era dorada” está viviendo una pesadilla que ya había sido prevista por los economistas clásicos, Adam Smith y David Ricardo. Ambos eran conscientes de que si los comerciantes y los industriales británicos hubiesen invertido en el extranjero e importado los productos manufacturados, ellos se habrían beneficiado, pero el Reino Unido en su conjunto lo habría pasado muy mal. Por ello tenían la esperanza de poder evitar las consecuencias de esto mediante un “privilegio de lo doméstico”, con lo que se referían a la preferencia a desarrollar los negocios propios en el país de origen y ver como éste crecía y se desarrollaba. Ricardo en concreto esperaba que gracias a este privilegio la mayoría de las personas acaudaladas “estarían satisfechas con el bajo nivel de beneficios que podían obtener en su propio país, en vez de buscar un empleo más provechoso de su capital entre las naciones extranjeras”.

El 4 de agosto pasado la portada del New York Times proporcionaba un ejemplo muy gráfico de todo esto. Aparecían dos noticias, una al lado de la otra. En la primera se comentaba la rotunda oposición republicana a cualquier acuerdo que “implique un aumento de los ingresos”, un eufemismo con el que se refieren a los impuestos a los más ricos. La otra llevaba el titular “Incluso con precios más altos, los productos de lujo se venden como rosquillas”. El pretexto que se ha puesto a menudo para reducir los impuestos a los ricos y a las empresas,

hasta llegar a puntos increíblemente bajos, es que sus beneficios redundan en la creación de empleo, algo que ahora no pueden hacer porque sus bolsillos están atestados de ganancias cada vez mayores.

El escenario ha quedado aptamente retratado en un folleto para inversores que ha editado el gigantesco banco Citibank. Sus analistas describen una sociedad global dividida en dos grupos: la plutocracia y el resto. En este mundo, el crecimiento se debe a la élite rica, y es en gran medida también consumido por ella. Después viene la inmensa mayoría de los que no son ricos, a los que a veces se denomina como el precariado global, la fuerza de trabajo cuya vida transcurre en condiciones precarias. En los Estados Unidos son víctimas de una “inseguridad laboral cada vez mayor” que es precisamente la base de una economía saludable, tal y como explicó el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, cuando compareció frente al Congreso para loar su propia actuación como gestor económico. Este es el verdadero cambio en la distribución de poder en la sociedad global.

Los analistas del Citigroup aconsejan a los inversores que se centren en los más ricos, que es donde hay algo que sacar. Su Fondo de Acciones de la Plutocracia, como lo han denominado, ha arrojado un rendimiento muy superior al índice mundial de mercados desarrollados desde 1985, que es cuando los programas económicos de Reagan y Thatcher, consistentes en enriquecer aún más a los ya muy ricos, empezaron realmente a dar resultados.

Antes de la crisis de 2007, de la que las instituciones financieras de la nueva etapa, tras la época dorada, son responsables en buena medida, éstas habían acumulado un impresionante poder económico, superior en más del triple a la proporción correspondiente de los beneficios de las multinacionales. Después de la crisis, algunos economistas empezaron a investigar su comportamiento desde un punto de vista exclusivamente económico. Robert Solow, premio Nobel en economía, llegó a la conclusión de que su repercusión es, en la mayor parte de las ocasiones, negativa: “Lo más probable es que los éxitos en este terreno aporten muy poco o nada a la eficacia de la economía real, mientras que los fracasos resultan en una transferencia de riqueza de los contribuyentes a los ejecutivos”.

Al hacer jirones los restos de la democracia política han sentado las bases para profundizar aún más este proceso letal, siempre que sus víctimas estén dispuestas a sufrir las consecuencias en silencio.

COLABORACIÓN - TRABAJO ORIGINAL

American Decline: Causes and Consequences

Noam Chomsky

Emeritus professor of linguistics and philosophy at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Mass.

Published Wednesday, August 24, 2011.

In the 2011 summer issue of the journal of the American Academy of Political Science, we read that it is “a common theme” that the United States, which “only a few years ago was hailed to stride the world as a colossus with unparalleled power and unmatched appeal – is in decline, ominously facing the prospect of its final decay.” It is indeed a common theme, widely believed, and with some reason. But an appraisal of US foreign policy and influence abroad and the strength of its domestic economy and political institutions at home suggests that a number of qualifications are in order. To begin with, the decline has in fact been proceeding since the high point of US power shortly after World War II, and the remarkable rhetoric of the several years of triumphalism in the 1990s was mostly self-delusion. Furthermore, the commonly drawn corollary – that power will shift to China and India – is highly dubious. They are poor countries with severe internal problems. The world is surely becoming more diverse, but despite America’s decline, in the foreseeable future there is no competitor for global hegemonic power.

To review briefly some of the relevant history: During World War II, US planners recognized that the US would emerge from the war in a position of overwhelming power. It is quite clear from the documentary record that “President Roosevelt was aiming at United States hegemony in the postwar world,” to quote the assessment of diplomatic historian Geoffrey Warner. Plans were developed to control what was called a Grand Area, a region encompassing the Western Hemisphere, the Far East, the former British empire – including the crucial Middle East oil reserves – and as much of Eurasia as possible, or at the very least its core industrial regions in Western Europe and the southern European states. The latter were regarded as essential for ensuring control of Middle East energy resources. Within these expansive domains, the US was to maintain “unquestioned power” with “military and economic supremacy,” while ensuring the “limitation of any exercise of sovereignty” by states that might interfere with its global designs. The doctrines still prevail, though their reach has declined.

Wartime plans, soon to be carefully implemented, were not unrealistic. The US had long been by far the richest country in

the world. The war ended the Depression and US industrial capacity almost quadrupled, while rivals were decimated. At the war’s end, the US had half the world’s wealth and unmatched security. Each region of the Grand Area was assigned its ‘function’ within the global system. The ensuing ‘Cold War’ consisted largely of efforts by the two superpowers to enforce order on their own domains: for the USSR, Eastern Europe; for the US, most of the world.

By 1949, the Grand Area was already seriously eroding with “the loss of China,” as it is routinely called. The phrase is interesting: one can only ‘lose’ what one possesses. Shortly after, Southeast Asia began to fall out of control, leading to Washington’s horrendous Indochina wars and the huge massacres in Indonesia in 1965 as US dominance was restored. Meanwhile, subversion and massive violence continued elsewhere in the effort to maintain what is called ‘stability,’ meaning conformity to US demands.

But decline was inevitable, as the industrial world reconstructed and decolonization pursued its agonizing course. By 1970, US share of world wealth had declined to about 25%, still colossal but sharply reduced. The industrial world was becoming ‘tripolar,’ with major centers in the US, Europe, and Asia – then Japan-centered – already becoming the most dynamic region.

Twenty years later the USSR collapsed. Washington’s reaction teaches us a good deal about the reality of the Cold War. The Bush I administration, then in office, immediately declared that policies would remain pretty much unchanged, but under different pretexts. The huge military establishment would be maintained, but not for defense against the Russians; rather, to confront the “technological sophistication” of third world powers. Similarly, they reasoned, it would be necessary to maintain “the defense industrial base,” a euphemism for advanced industry, highly reliant on government subsidy and initiative. Intervention forces still had to be aimed at the Middle East, where the serious problems “could not be laid at the Kremlin’s door,” contrary to half a century of deceit. It was quietly conceded that the problems had always been “radical nationalism,” that is, attempts by countries to pursue an independent course in violation of Grand Area principles. These

policy fundamentals were not modified. The Clinton administration declared that the US has the right to use military force unilaterally to ensure “uninhibited access to key markets, energy supplies, and strategic resources.” It also declared that military forces must be “forward deployed” in Europe and Asia “in order to shape people’s opinions about us,” not by gentle persuasion, and “to shape events that will affect our livelihood and our security.” Instead of being reduced or eliminated, as propaganda would have led one to expect, NATO was expanded to the East. This was in violation of verbal pledges to Mikhail Gorbachev when he agreed to allow a unified Germany to join NATO.

Today, NATO has become a global intervention force under US command, with the official task of controlling the international energy system, sea lanes, pipelines, and whatever else the hegemonic power determines.

There was indeed a period of euphoria after the collapse of the superpower enemy, with excited tales about “the end of history” and awed acclaim for Clinton’s foreign policy. Prominent intellectuals declared the onset of a “noble phase” with a “saintly glow,” as for the first time in history a nation was guided by “altruism” and dedicated to “principles and values,” and nothing stood in the way of the “idealistic New World bent on ending inhumanity,” which could at last carry forward unhindered the emerging international norm of humanitarian intervention.

Not all were so enraptured. The traditional victims, the Global South, bitterly condemned “the so-called ‘right’ of humanitarian intervention,” recognizing it to be just the old “right” of imperial domination. More sober voices at home among the policy elite could perceive that for much of the world, the US was “becoming the rogue superpower,” considered “the single greatest external threat to their societies,” and that “the prime rogue state today is the United States.” After Bush Jr. took over, increasingly hostile world opinion could scarcely be ignored. In the Arab world particularly, Bush’s approval ratings plummeted. Obama has achieved the impressive feat of sinking still lower, down to 5% in Egypt and not much higher elsewhere in the region.

Meanwhile, decline continued. In the past decade, South America has been ‘lost.’ The ‘threat’ of losing South America had loomed decades earlier. As the Nixon administration was planning the destruction of Chilean democracy, and the installation of a US-backed Pinochet dictatorship – the National Security Council warned that if the US could not control Latin America, it could not expect “to achieve a successful order elsewhere in the world.”

But far more serious would be moves towards independence in the Middle East. Post WWII planning recognized that control of the incomparable energy reserves of the Middle East would yield “substantial control of the world,” in the words of the influential Roosevelt advisor A.A. Berle. Correspondingly, that loss of control would threaten the project of global dominance that was clearly articulated during World War II and has been sustained in the face of major changes in world order ever since.

A further danger to US hegemony was the possibility of meaningful moves towards democracy. New York Times executive editor Bill Keller writes movingly of Washington’s “yearning to embrace the aspiring democrats across North Africa and the Middle East.” But recent polls of Arab opinion reveal very clearly that functioning democracy where public opinion influences policy would be disastrous for Washington. Not surprisingly, the first few steps in Egypt’s foreign policy after ousting Mubarak have been strongly opposed by the US and its Israeli client.

While longstanding US policies remain stable, with tactical adjustments, under Obama there have been some significant changes. Military analyst Yochi Dreazen observes in the Atlantic that Bush’s policy was to capture (and torture) suspects, while Obama simply assassinates them, with a rapid increase in terror weapons (drones) and the use of Special Forces, many of them assassination teams. Special Forces are scheduled to operate in 120 countries. Now as large as Canada’s entire military, these forces are, in effect, a private army of the president, a matter discussed in detail by American investigative journalist Nick Turse on the website Tomdispatch. The team that Obama dispatched to assassinate Osama bin Laden had already carried out perhaps a dozen similar missions in Pakistan.

As these and many other developments illustrate, though America’s hegemony has declined, its ambition has not.

Another common theme, at least among those who are not willfully blind, is that American decline is in no small measure self-inflicted. The comic opera in Washington this summer, which disgusts the country (a large majority think that Congress should just be disbanded) and bewilders the world, has few analogues in the annals of parliamentary democracy. The spectacle is even coming to frighten the sponsors of the charade. Corporate power is now concerned that the extremists they helped put in office in Congress may choose to bring down the edifice on which their own wealth and privilege relies, the powerful nanny state that caters to their interests.

The eminent American philosopher John Dewey once described politics as “the shadow cast on society by big business,” warning that “attenuation of the shadow will not change the substance.” Since the 1970s, the shadow has become a dark cloud enveloping society and the political system. Corporate power, by now largely financial capital, has reached the point that both political organizations, which now barely resemble traditional parties, are far to the right of the population on the major issues under debate.

The costs of the Bush-Obama wars in Iraq and Afghanistan are now estimated to run as high as \$4.4 trillion – a major victory for Osama bin Laden, whose announced goal was to bankrupt America by drawing it into a trap. For the public, the primary domestic concern, rightly, is the severe crisis of unemployment. Under current circumstances, that critical problem can be overcome only by a significant government stimulus, well beyond the recent one, which barely matched decline in state and local spending, though even that limited initiative did probably save millions of jobs. For financial institutions the primary concern is the deficit. Therefore, only the deficit is under discussion. A large majority of the population favor addressing the deficit by taxing the very rich (72% for, 21% opposed). Cutting health programs is opposed by overwhelming majorities (69% Medicaid, 79% Medicare). The likely outcome is therefore the opposite.

Reporting the results of a study of how the public would eliminate the deficit, its director, Steven Kyll, writes that “clearly both the administration and the Republican-led House are out of step with the public’s values and priorities in regard to the budget... The biggest difference in spending is that the public favored deep cuts in defense spending, while the administration and the House propose modest increases... The public also favored more spending on job training, education, and pollution control than did either the administration or the House.”

The 2011 military budget – almost matching that of the rest of the world combined – is higher in real terms than at any time since World War II and is slated to go even higher.

The deficit crisis is largely manufactured as a weapon to destroy hated social programs on which a large part of the population relies. Economics correspondent Martin Wolf of the London Financial Times writes that “it is not that tackling the US fiscal position is urgent... The US is able to borrow on easy terms, with yields on 10-year bonds close to 3 percent, as the few non-hysterics predicted. The fiscal challenge is long term, not immediate.” Very significantly, he adds: “The astonishing

feature of the federal fiscal position is that revenues are forecast to be a mere 14.4 percent of GDP in 2011, far below their postwar average of close to 18 percent. Individual income tax is forecast to be a mere 6.3 percent of GDP in 2011. This non-American cannot understand what the fuss is about: in 1988, at the end of Ronald Reagan’s term, receipts were 18.2 percent of GDP. Tax revenue has to rise substantially if the deficit is to close.” Astonishing indeed, but it is the demand of the financial institutions and the super-rich, and in a rapidly declining democracy, that’s what counts.

Though the deficit crisis is manufactured for reasons of savage class war, the long-term debt crisis is serious, and has been ever since Ronald Reagan’s fiscal irresponsibility turned the US from the world’s leading creditor to the world’s leading debtor, tripling national debt and raising threats to the economy that were rapidly escalated by George W. Bush. But for now, it is the crisis of unemployment that is the gravest concern.

The final ‘compromise’ on the crisis – more accurately, a capitulation to the far right – is the opposite of what the public wants throughout, and is almost certain to lead to slower growth and long-term harm to all but the rich and corporations, which are enjoying record profits. Few serious economists would disagree with Harvard economist Lawrence Summers that “America’s current problem is much more a jobs and growth deficit than an excessive budget deficit,” and that the deal reached in Washington in August, though preferable to a highly unlikely default, is likely to cause further harm to a deteriorating economy.

Not even discussed is the fact that the deficit would be eliminated if the dysfunctional privatized health care system in the US were replaced by one similar to other industrial societies, which have half the per person costs and at least comparable health outcomes. The financial institutions and pharmaceutical industry are far too powerful for such options even to be considered, though the thought seems hardly Utopian. Off the agenda for similar reasons are other economically sensible options, such as a small financial transactions tax.

Meanwhile, new gifts are regularly lavished on Wall Street. The House Appropriations Committee cut the budget request for the Securities and Exchange Commission, the prime barrier against financial fraud. The Consumer Protection Agency is unlikely to survive intact. And Congress wields other weapons in its battle against future generations. In the face of Republican opposition to environmental protection, “A major American utility is shelving the nation’s most

prominent effort to capture carbon dioxide from an existing coal-burning power plant, dealing a severe blow to efforts to rein in emissions responsible for global warming,” the New York Times reports.

The self-inflicted blows, while increasingly powerful, are not a recent innovation. They trace back to the 1970s, when the national political economy underwent major transformations, bringing to an end what is commonly called “the Golden Age” of (state) capitalism. Two major elements were financialization and offshoring of production, both related to the decline in rate of profit in manufacturing, and the dismantling of the post-war Bretton Woods system of capital controls and regulated currencies. The ideological triumph of “free market doctrines,” highly selective as always, administered further blows, as they were translated into deregulation, rules of corporate governance linking huge CEO rewards to short-term profit, and other such policy decisions. The resulting concentration of wealth yielded greater political power, accelerating a vicious cycle that has led to extraordinary wealth for a tenth of one percent of the population, mainly CEOs of major corporations, hedge fund managers, and the like, while for the large majority real incomes have virtually stagnated.

In the past 30 years, the “masters of mankind,” as Smith called them, have abandoned any sentimental concern for the welfare of their own society, concentrating instead on short-term gain and huge bonuses, the country be damned – as long as the powerful nanny state remains intact to serve their interests. In parallel, the cost of elections skyrocketed, driving both parties even deeper into corporate pockets. What remains of political democracy has been undermined further as both parties have turned to auctioning congressional leadership positions. Political economist Thomas Ferguson observes that “uniquely among legislatures in the developed world, U.S. congressional parties now post prices for key slots in the lawmaking process.” The legislators who fund the party get the posts, virtually compelling them to become servants of private capital even beyond the norm. The result, Ferguson continues, is that debates “rely heavily on the endless repetition of a handful of slogans that have been battle tested for their appeal to national investor blocs and interest groups that the leadership relies on for resources.”

The post-Golden Age economy is enacting a nightmare envisaged by the classical economists, Adam Smith and David Ricardo. Both recognized that if British merchants and manufacturers invested abroad and relied on imports, they would profit, but England would suffer. Both hoped that these

consequences would be averted by home bias, a preference to do business in the home country and see it grow and develop. Ricardo hoped that thanks to home bias, most men of property would “be satisfied with the low rate of profits in their own country, rather than seek a more advantageous employment for their wealth in foreign nations.

A graphic illustration appeared on the front page of the New York Times on August 4. Two major stories appear side by side. One discusses how Republicans fervently oppose any deal “that involves increased revenues” – a euphemism for taxes on the rich. The other is headlined “Even Marked Up, Luxury Goods Fly Off Shelves.” The pretext for cutting taxes on the rich and corporations to ridiculous lows is that they will invest in creating jobs – which they cannot do now as their pockets are bulging with record profits.

The developing picture is aptly described in a brochure for investors produced by banking giant Citigroup. The bank’s analysts describe a global society that is dividing into two blocs: the plutonomy and the rest. In such a world, growth is powered by the wealthy few, and largely consumed by them. Then there are the ‘non-rich,’ the vast majority, now sometimes called the global precariat, the workforce living a precarious existence. In the US, they are subject to “growing worker insecurity,” the basis for a healthy economy, as Federal Reserve chair Alan Greenspan explained to Congress while lauding his performance in economic management. This is the real shift of power in global society.

The Citigroup analysts advise investors to focus on the very rich, where the action is. Their “Plutonomy Stock Basket,” as they call it, far outperformed the world index of developed markets since 1985, when the Reagan-Thatcher economic programs of enriching the very wealthy were really taking off.

Before the 2007 crash for which the new post-Golden Age financial institutions were largely responsible, these institutions had gained startling economic power, more than tripling their share of corporate profits. After the crash, a number of economists began to inquire into their function in purely economic terms. Nobel laureate in economics Robert Solow concludes that their general impact is probably negative: “the successes probably add little or nothing to the efficiency of the real economy, while the disasters transfer wealth from taxpayers to financiers.”

By shredding the remnants of political democracy, they lay the basis for carrying the lethal process forward – as long as their victims are willing to suffer in silence.